



MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA MODIFICACIÓN Nº 1 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “SERVICIO DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS DE PROTECCIÓN”

Expediente: 003/2025 (A/SER-010463/2024)

A) ANTECEDENTES.

Mediante Orden de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales nº 2544/2024, de 30 de agosto, se adjudicó por procedimiento abierto el contrato de servicios denominado “**SERVICIO DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS DE PROTECCIÓN**”, a favor de la empresa INTERPRET SOLUTIONS, S.L., en la cantidad de 42.108,00 euros (21% de IVA incluido), con un plazo de ejecución inicialmente previsto de 12 meses, desde el día 1 de enero de 2025, hasta el día 31 de diciembre de 2025, prorrogable por otros 12 meses más.

El contrato tiene como finalidad proporcionar servicios de interpretación oral y telefónica (incluyéndose la videollamada), traducción escrita de documentos y transcripción de soportes audiovisuales o similares grabados en idiomas o dialectos distintos del español, tanto de forma directa como inversa, en el marco de los procedimientos tramitados en materia de protección de menores, y destinado a la Subdirección General de Protección a la Infancia de la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad (en adelante, Subdirección General de Protección a la Infancia) y la Red de Centros de Protección de Menores de la Comunidad de Madrid.

Muchos de los menores que se encuentran en situación de desamparo y respecto de los cuales la Comunidad de Madrid asume su tutela, son extranjeros y no saben expresarse en castellano.

Previamente a asumir la medida de protección que corresponda, es necesario tener comparecencias con la presencia de un intérprete con estos menores y, en su caso, con sus familias.

Además, es necesario poder conocer el contenido de documentos de identificación y en ocasiones, peticiones e informes de terceros países que están en el idioma original o, enviar por parte de la Administración peticiones traducidas para poder obtener información necesaria para la regularización del menor.

Aunque los menores tienen más facilidad que los adultos para adaptarse y aprenden rápidamente, mientras no conozcan o dominen el español, lo lógico es que se sientan más seguros conversando en su propio idioma con el profesional que les atiende, minimizándose de esta manera la ansiedad y el estrés por la falta de entendimiento, a la vez que se garantiza la intimidad y la confidencialidad debidas a su especial situación.

Además, es obligación de la Administración, en tanto que tutora de esos menores, facilitar los medios para que conozcan sus derechos y puedan comunicar lo que necesiten de forma que sea comprensible, asegurando así que entienden todo lo que se le transmite y que vaya a afectarles en su vida.

Estos menores proceden, en su mayoría de Marruecos y Argelia, por tanto, hablan árabe y presentan un perfil complejo, enmarcado dentro de las siguientes características:

- **A nivel psíquico:** impulsividad, dificultades de autocontrol, escasa tolerancia a la frustración, endurecimiento emocional, falta de asertividad.
- **A nivel social:** ausencia de figuras adultas de referencia en nuestro país; proyecto migratorio sin definir; consumos asociados de sustancias tóxicas; marginalidad en su país de procedencia; etc.
- **A nivel formativo:** escolaridad insuficiente en su país de origen; conocimientos y/o aprendizajes no adaptados a los planes formativos de nuestro país; escaso o nulo conocimiento del castellano; etc.

Dado que la mayoría de estos menores presentan una conflictividad importante debido a su historia de vida, la existencia de este servicio se encamina además a facilitar la comprensión y rebajar tensiones.

Este servicio responde fundamentalmente a los siguientes objetivos:

- Facilitar la comunicación de los profesionales de protección con los menores y en su caso, con la familia de origen del menor, a fin de conocer la localización de éste y su situación, y colaborar en la transmisión de información y en el envío de documentación para lograr su plena identificación.
- Estar presentes en las comparecencias necesarias para conocer las circunstancias del menor e informarle de sus derechos, de la posibilidad del asilo y de la medida que se va asumir y sus consecuencias.
- Traducir la documentación necesaria para poder documentar al menor en España ante las autoridades competentes, conforme exige la actual normativa y el protocolo de MENAS, así como traducir cuanto documento sea recibido de otros países o que deba ser enviado a otros países en el marco de un expediente de protección.

B) INDICADORES DE ATENCIÓN Y TENDENCIAS

A 31 de diciembre de 2024, un total de 4.154 menores de edad tenían una medida de protección asumida por la Comunidad de Madrid (guarda o tutela) y un 20 % del total eran menores extranjeros no acompañados con medida de protección.

Este colectivo, definido como “*especialmente vulnerable*” por la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, y por la Ley 4/2023, de 22 de marzo, requiere de una especial intervención para garantizar su bienestar y su interés superior, de acuerdo con las circunstancias y siendo más compleja en los últimos años. Si bien los menores de nacionalidad marroquí siguen protagonizando los principales ingresos (465 en 2024) otras nacionalidades también empiezan a despuntar en las altas de los centros de protección (de Gambia ingresaron 320 menores en 2024, 215 de Mali, 196 de Mauritania, 157 de Senegal, 128 de Argelia y 119 de Guinea Conakry), junto a menores de otras nacionalidades (3 de Bangladesh; 3 de Burkina Faso; 5 de Camerún; 5 de India; 2 de Irán, etc.).

Este contrato se lleva licitando por este centro directivo desde el año 2019, deviniendo en necesidad estructural, no asumible a través de contratos menores, debido al volumen cada vez más creciente de la petición de servicios.

El presupuesto de licitación se ha mantenido estable en los últimos años, es decir, se establecía un precio máximo de 42.108 euros, IVA incluido del 21 %, para todas las tipologías de servicios conforme a unos determinados precios unitarios, sobre los cuales la adjudicataria realizaba una baja y hasta el año pasado, este presupuesto era suficiente para afrontar las actuales tendencias migratorias.

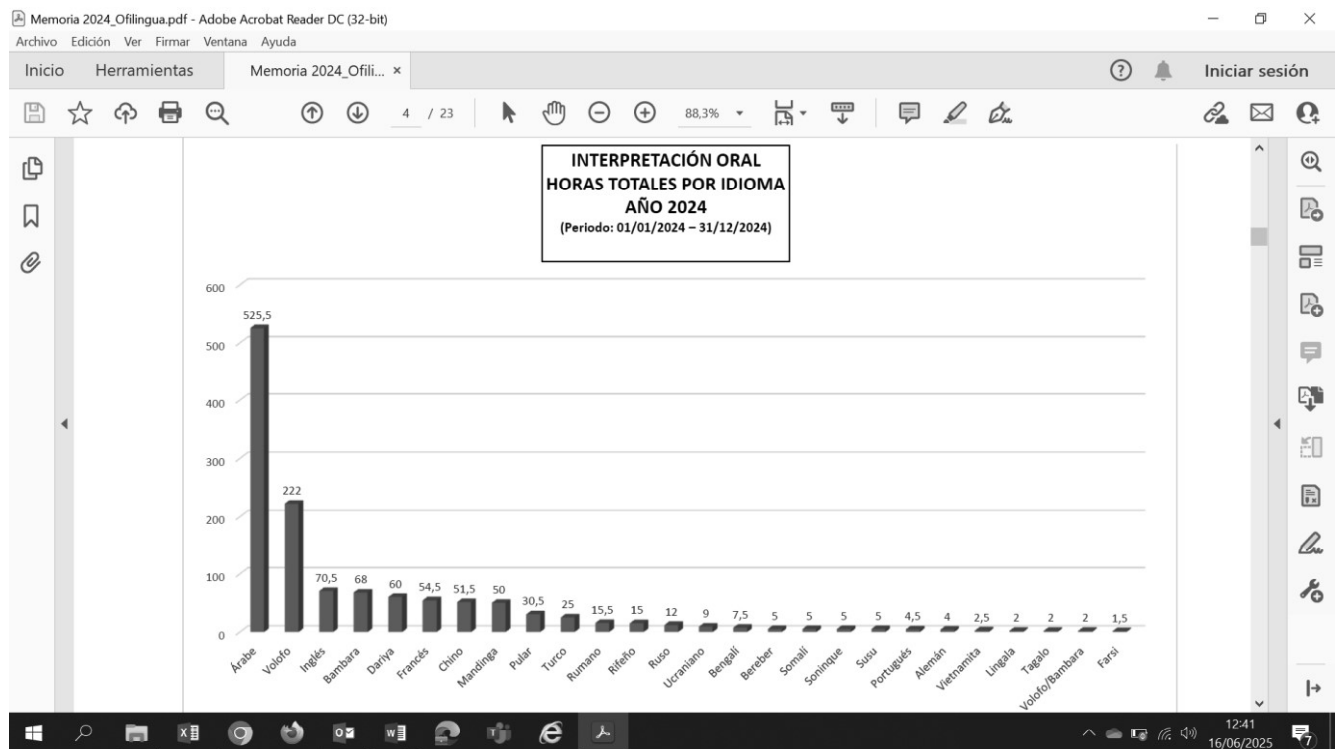
Si bien es verdad que, en relación con años anteriores, la factura mensual se iba incrementando, la evolución del gasto no hacía presagiar un volumen tan elevado de servicios realizados en el mes de diciembre de 2024, que fue de 11.488,18 euros y que no ha podido abonarse en su totalidad por no haber crédito disponible para ello.

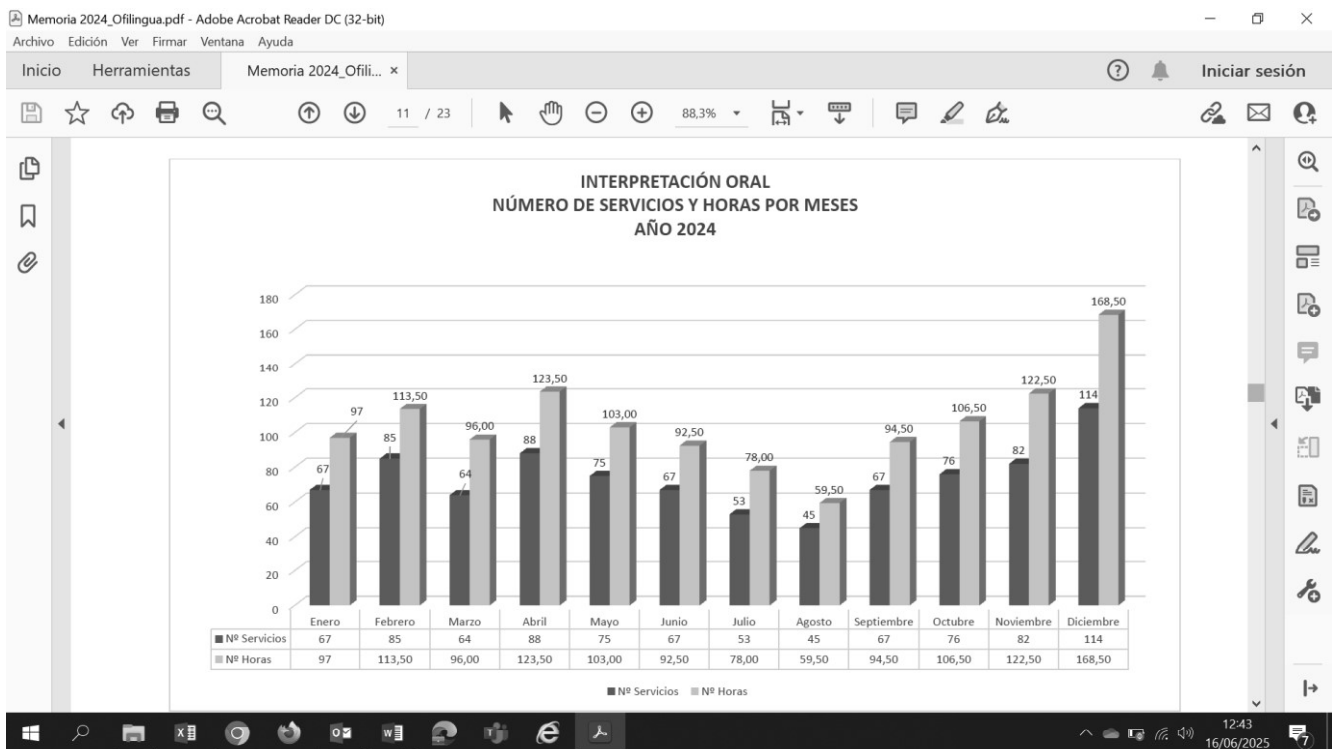
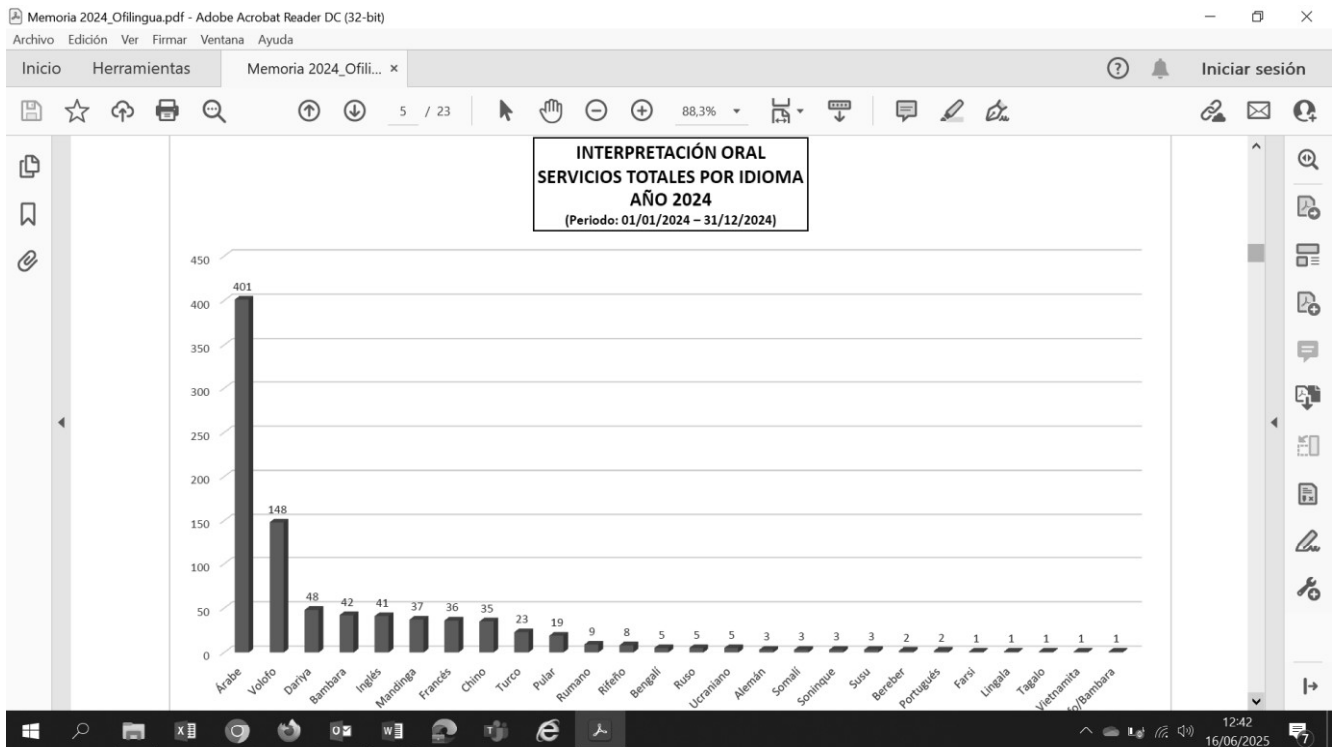
A continuación, se muestran los importes mensuales facturados en 2024, obteniéndose una media cercana a los 5.000 euros hasta el mes de noviembre.

MES	IMPORTE
ENERO	4.369,67 €
FEBRERO	4.795,29 €

MARZO	6.224,69 €	
ABRIL	5.819,29 €	
MAYO	4.591,65 €	
JUNIO	4.594,65 €	
JULIO	3.775,84 €	
AGOSTO	3.272,81 €	
SEPTIEMBRE	5.059,99 €	
OCTUBRE	5.678,77 €	
NOVIEMBRE	5.764,08 €	MEDIA
		4.904,25 €

A continuación, también se trasladan los indicadores de atención por hora, tipo de servicio e idioma del servicio prestado durante el año 2024. No obstante, se incorpora la memoria anual del servicio a este expediente.





Este incremento se dio en la última factura del contrato de servicios sin margen para haber ampliado el presupuesto conforme a las prescripciones establecidas para la modificación contractual en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante, PCAP), por lo que, dándose un recorrido temporal suficiente en el nuevo contrato, y en el ejercicio de las funciones de seguimiento y control, por parte de este centro directivo se procede a justificar la conveniencia de modificar el nuevo contrato para dar cobertura a los

servicios venideros, evitando la finalización del mismo antes de la fecha formal de finalización, que sería el 31 de diciembre de 2025.

La constatación de la imposibilidad del abono de la última factura del anterior contrato se dio en el mes de febrero de 2025, cuando ya estaba en vigor el nuevo contrato adjudicado a la empresa INTERPRET SOLUTIONS, S.L., y es que la tramitación de este expediente contractual comenzó en enero de 2024, por lo que en ese momento no se tenía conocimiento de la insuficiencia del presupuesto de licitación del contrato, que hubiera permitido justificar la ampliación del presupuesto para el nuevo contrato sin tener que recurrir a una modificación contractual, que en la situación actual, se torna como obligatoria.

Enlazando con esto último, debe recordarse que, la Disposición Adicional 33ª de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP) contempla un marco específico para los contratos de suministros y servicios con necesidades variables, en los que no es posible determinar con exactitud el número total de unidades que se requerirán durante la ejecución del contrato.

Por otro lado, el artículo 309.1 de la LCSP regula la posibilidad de ajustar el número de unidades contratadas sin que un aumento se considere una modificación contractual formal, siempre que las unidades sean determinadas y las variaciones, habiendo sido previstas en los pliegos, no superen el 10% del precio del contrato, que se liquidaría a la finalización del contrato.

Por tanto, la aplicación de ambos preceptos parece claramente delimitada, así el artículo 309.1 de la LCSP estaría reservado para contratos en los que las unidades a ejecutar están determinadas de antemano, mientras que la Disposición adicional 33ª de la LCSP se aplicaría en casos de indeterminación en el número de unidades.

En el contrato de referencia no se establece un número determinado de servicios sino un precio unitario por tipología de servicio, por lo que es de aplicación la Disposición adicional 33ª de la LCSP. En este caso, una vez agotado el presupuesto máximo y con independencia de la fecha final del contrato, éste se extingue, salvo que previamente se tramite una modificación contractual para atender necesidades superiores a las inicialmente previstas y que es el procedimiento que se propone en esta memoria conforme al siguiente apartado.

C) PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN.

El Artículo 204 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece que *“Los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad”*.

Por otra parte, el apartado 21 de la cláusula 1 del capítulo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato indica que sí es posible la modificación, por lo que de acuerdo con la Disposición adicional 33ª de la LCSP, **en el caso de que, dentro de la vigencia del contrato, las necesidades reales fuesen superiores a las estimadas inicialmente, deberá tramitarse la correspondiente modificación antes de que se agote el presupuesto máximo inicialmente aprobado**, reservándose a tal fin el crédito necesario para cubrir el importe máximo de las nuevas necesidades.

En cuanto a las condiciones de procedencia de tal modificación, se prevé que podrá incrementarse o disminuirse el presupuesto destinado al contrato **cuando 6 meses antes de finalizar el contrato** o finalizar su prórroga, **las necesidades reales fuesen distintas a las estimadas inicialmente**, por causas tales como la variación del número de centros de la Red de Protección de Menores en los que se desarrollaba el servicio, del número de horas/páginas/minutos de servicio requeridos por tipo de servicio o modificación del número de beneficiarios o **que las mensualidades de los 6 primeros meses sean un 10 % más bajas o más altas del precio mensual resultante de prorratear el precio de adjudicación entre 12 meses**.

Como siempre, el porcentaje del precio del contrato ascendería a un máximo del 20 %.

Conforme a la información facilitada por la actual adjudicataria, INTERPRET SOLUTIONS, S.L., del presupuesto total (42.108 €, IVA incluido) se llevan gastados hasta el mes de mayo 24.799,50 euros (IVA incluido), es decir, se ha gastado casi el 60 % del precio del contrato, quedando como remanente para 7 meses de imputación (desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre, si bien, el mes de diciembre se imputa a la siguiente anualidad, suponiendo un importe de 3.509,00 €, IVA incluido) 17.308,50 euros, IVA incluido, que supondría un consumo mensual **de 2.472,64 euros aproximadamente, IVA incluido.**

La facturación hasta el momento ha sido la siguiente:

MES	IMPORTE	
ENERO	2.935,82 €	
FEBRERO	6.421,46 €	
MARZO	6.511,76 €	
ABRIL	3.686,30 €	
MAYO	5.244,18 €	
TOTAL	24.799,52 €	MEDIA
		4.959,90 €

Precisamente, la media mensual en este momento es muy parecida a la del contrato anterior, por lo que, con el crédito disponible solo podrían cubrirse entre 3 meses y 3 meses y medio.

Si partimos del prorrateo mensual que se indica en el PCAP para activar la modificación contractual, la mensualidad debería ser de 3.509 euros, IVA incluido, lo que supone una diferencia respecto a la media generada hasta el mes de mayo de **un 41 % aproximadamente, por lo que supera ampliamente ese 10 % contemplado**, y si bien todavía no hemos terminado el mes de junio y faltarían más de 6 meses, en concreto 7 meses para finalizar el contrato, **hay que actuar de forma rápida para evitar tanto la finalización anticipada del contrato como la falta de crédito para satisfacer el servicio.**

En todo caso, teniendo en cuenta la estructura descentralizada de petición de servicios, como medidas alternativas, se ha solicitado a las distintas unidades peticionarias de la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad **un uso racional y moderado del servicio.**

D) JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO

El Consejo de Estado ha resaltado **la importancia de justificar el interés público**, afirmando que *"la modificación contractual debe hallarse respaldada o legitimada por un interés público claro, patente e indubitado"*, de modo que *"al concurrir una "razón de interés público" para dicha modificación, habida cuenta de que si se procediese a la resolución del contrato y a una nueva licitación, no se obtendría ninguna ventaja desde el punto de vista técnico....y se incurriría en un gasto superior al que deriva de la modificación del contrato, a consecuencia del aumento de los costes derivado del aplazamiento en el tiempo de la nueva licitación"*

Teniendo en cuenta los flujos migratorios expuestos en el apartado B) de la presente memoria justificativa, el interés público se sustancia, por tanto, en la **supremacía del interés del menor**, cuyo bienestar debe ser garantizado y que para su debida atención y regularización precisa de los servicios de interpretación y de la documentación precisa, de acuerdo con los objetivos perseguidos por este contrato.

E) CARÁCTER NO SUSTANCIAL DE LA MODIFICACIÓN.

Respecto al **carácter sustancial de la modificación**, hay que señalar que la Jurisprudencia se opone a la introducción de alteraciones profundas en la fase de ejecución de los contratos cuando tales alteraciones puedan lesionar los principios de publicidad y concurrencia, que es lo que se produce siempre que quepa

presumir razonablemente que las nuevas condiciones del contrato podrían haber permitido concurrir a licitadores que no lo hicieron o presentar a los que sí concurren ofertas distintas, de tal forma que la adjudicación pudiera haber recaído en un adjudicatario distinto.

El Tribunal Europeo (**Sentencia Succhi di Frutta**) considera que una modificación contractual posterior a la adjudicación es contraria al Derecho Comunitario, a menos que se cumpla **alguna de las dos siguientes condiciones**:

- a) Que la modificación no afecte a ninguna condición esencial de la licitación, entendiéndose que una modificación es esencial cuando no quepa excluir que las condiciones originales, menos favorables, hayan disuadido a otros licitadores a participar en la licitación, o que a la vista de las condiciones actuales podría haber otros licitadores interesados en la licitación, o que la adjudicación hubiera recaído en otro licitador distinto. No se debe olvidar además que el perfil de estos menores hace también muy difícil encontrar entidades que dispongan de equipos formados, estables y debidamente acreditados para atenderlos.

Con esta ampliación de plazas y el refuerzo del servicio de vigilancia y seguridad no se afecta a ninguna condición especial del procedimiento contractual, y se puede prever que se hubieran presentado las mismas entidades que lo hicieron en su momento, o únicamente la adjudicataria, dada la situación actual de incremento de precios, especialmente laborales, de seguridad y de suministros energéticos.

- b) Que la posibilidad de efectuar una modificación, así como sus modalidades, **esté prevista de forma clara, precisa e inequívoca en la documentación de la licitación.**

Estas condiciones se encuentran claramente expuestas en el PCAP, proponiéndose una modificación del máximo establecido del 20 %, es decir, se encuentra en los márgenes contemplados en el PCAP, no resultando afectados los precios unitarios de cada tipología de servicio y no alterándose de forma sustancial las prestaciones inicialmente pactadas, por lo cual, **no se considera una modificación sustancial** y en este caso, se hubieran presentado seguramente las mismas empresas participantes, ya que en este tipo de contratos no se asegura un presupuesto de ejecución determinado, estando sujeto a las necesidades de la Administración, que puede cumplir o no expectativas, pero no es un aliciente suficiente para haber permitido una mayor concurrencia, porque la cuantía no es tan significativa.

El gasto se imputará al programa 232F subconcepto 22709 de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

F) CONFORMIDAD A LA PROPUESTA.

De acuerdo con la Cláusula 21 del PCAP y lo establecido en los artículos 191 y 203 a 207 de la LCSP, se propone la **modificación nº 1** del contrato de servicios denominado “denominado **SERVICIO DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS DE PROTECCIÓN**”, que se encuentra en vigor, para su incremento en su precio total en un 20 %, por un importe de **OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (8.421,60 €)** para su inicio dentro de lo que resta de anualidad 2025, para a continuación tramitar la prórroga del contrato.

Tomando la base imponible sin IVA, 34.800 euros, el 20 % de esta cuantía es de 6.960 euros, cuantía a la que se añade el IVA (21 %) dando como resultado un importe de 8.421,60 euros, que incrementará en dicha cuantía el presupuesto inicial con independencia del momento temporal en que tenga efectos la modificación.

Los efectos de la modificación comenzarán al día siguiente de su formalización con una previsión de inicio del 1 de septiembre de 2025, conforme a los siguientes importes de ejecución e imputación:

IMPORTE DE EJECUCIÓN

EJERCICIO	DESDE	HASTA	B.I. MODIFICACIÓN (20% PRECIO)	IVA (21%)	TOTAL
2025	01/09/2025	31/12/2025	6.960,00	1.461,60	8.421,60

IMPORTE DE IMPUTACIÓN

EJERCICIO	DESDE	HASTA	B.I. MODIFICACIÓN (20% PRECIO)	IVA (21%)	TOTAL
2025	01/09/2025	30/11/2025	5.220,00	1.096,20	6.316,20
2026	01/12/2025	31/12/2025	1.740,00	365,40	2.105,40
TOTALES	01/09/2025	31/12/2025	6.960,00	1.461,60	8.421,60

Se ha dado audiencia al adjudicatario de acuerdo con la prescripción legal, habiendo remitido su aceptación el día 23 de junio de 2025.

Dado el escaso remanente existente, el período de tiempo de ejecución y la pequeña cuantía de la modificación contractual, es por lo que se solicita la **declaración de urgencia** para la gestión del presente expediente, a fin de valorar con antelación otras alternativas en caso de que no sea suficiente con esta modificación contractual.

En Madrid, a la fecha de la firma

**LA DIRECTORA GENERAL DE INFANCIA,
FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD**

Firmado digitalmente por: SILVIA VALMAÑA OCHAITA - ***6248**
Fecha: 2025.07.23 09:40

Fdo: Silvia Valmaña Ochaíta